



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2017-00218-000
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: ANA DELIA SALAMANCA BUITRAGO
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP
ORDINARIO: 1100133331026-2011-00116-00

Una vez realizada la liquidación por parte de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos¹, procede el Despacho a estudiar la demanda ejecutiva interpuesta por la señora Ana Delia Salamanca Buitrago, a través de apoderado judicial, en la cual solicita a este Juzgado, se libre orden de pago a su favor y en contra del Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Ugpp, con el fin de obtener el pago de las diferencias de las mesadas dejadas de cancelar desde el 18 de agosto de 2009 y hasta cuando se verifique el pago total de la obligación, por la suma total de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$54.698.925) m/cte.**

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no librar mandamiento de pago en el presente asunto. Para el efecto se analizará lo siguiente:

A. PRETENSIONES

La activa solicita se libre mandamiento ejecutivo de pago de la siguiente manera:

*“1. Que se libre mandamiento de pago por las diferencias dejadas de cancelar por la **UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PORTECCIÓN SOCIAL, (UGPP) a mi poderdante señora, ANA DELIA SALAMANCA BUITRAGO**, Desde el día 18 de agosto de 2009 hasta cuando se verifique el pago total de la obligación, que a la fecha suman \$54.698.925, de acuerdo a la sentencia del Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, con numero de radicado 2011-0116 de fecha 05 de Agosto del 2011.*

¹ Folios 129 y 130

2. *Que el pago se realice a favor de mi poderdante se realice con la aplicación de los aumentos de acuerdo al IPC anual en los términos del (sic) artículos 177, y 178 del CCA.*
3. *Que se condene en costas a (sic) parte demandada.”*

B. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Destaca el abogado de la parte actora, que en el ordinal tercero de la parte resolutive de la sentencia, señala que la liquidación debe ser de acuerdo a la asignación mensual más elevada del último año.

Señala, que según certificación expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y el desprendible de pago de fecha 10 de agosto de 2008, el salario más alto devengado por la actora fue de \$4.120.175.

Afirma, que sobre este ese último salario devengado, se debe aplicar un 75%, el cual da como resultado para liquidar la respectiva indexación un monto total de \$3.090.131.25.

Concluye, que la entidad demandada solo le reconoció la suma de \$2.638.786.00 con una diferencia de \$451.345.25, a favor de la ejecutante a partir del 18 de agosto del año 2009.

CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. *Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:*

1. *Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)*”

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso², se tiene que de

² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jertis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme a lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación a las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales, lo siguiente:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Así las cosas, de conformidad con los artículos reseñados, el proceso ejecutivo tendría varios derroteros a tener en cuenta en casos como el presente:

1. Solicitud: A través de memorial radicado por el abogado **CLIMACO ACHURY MURCIA** en representación de la señora **ANA DELIA SALAMANCA BUITRAGO**, solicitó al Juzgado que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la UGPP, con el fin de obtener el pago de las diferencias dejadas de cancelar desde el 18 de agosto de 2009 ordenado en la sentencia proferida por este Despacho Judicial.

Luego entonces, se encuentra satisfecho el requisito de solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo.

Ahora bien, adicional a la solicitud, se hace preciso analizar si la misma fue elevada dentro del término que la Ley que otorga para ello.

Al respecto, el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

“Artículo 136. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las acciones.

(...)

11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.”

Negrilla fuera de texto original

A su vez el artículo 177 del mismo ordenamiento dispuso en su inciso final lo siguiente:

“Artículo 177. Reglamentado por el Decreto Nacional 768 de 1993

(...)

*Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. **Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.***

Negrilla fuera de texto original

Así las cosas el ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva; sin embargo, dicho término debe iniciarse a contabilizar luego de vencidos los 18 meses que tiene la entidad para realizar el pago, en tanto la norma es clara en señalar que las sentencias “*serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.*”

En el plenario se constata que el ejecutado es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, como entidad pública receptora de las funciones y todas las actividades adelantadas en su momento por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha determinado que en estos asuntos se generó una suspensión en la contabilización del término de caducidad para efectos de la presentación de la demanda ejecutiva, con ocasión del adelantamiento del proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E., así lo expresó en sentencia proferida el 8 de septiembre de 2016³.

Así las cosas, en el plenario se evidencia que la demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 6 de diciembre de 2013 (fl.1º), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, se encuentra dentro de la oportunidad legal, atendiendo la suspensión generada entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, momento en el cual culminó el proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

Por lo anterior, es claro que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de Ley.

³ Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda - Subsección “E”. Despacho No. 13. Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Aprobada en acta de la fecha. Auto N° 83. Magistrada Publicación: PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO.

2. Título Ejecutivo: En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituyen varias actuaciones a saber:

Por un lado se encuentra la sentencia proferida por este Juzgado el 5 de agosto de 2011. (Fls.90-110).

Seguidamente, debe tenerse como tal la Resolución UGM 055945 del 17 de septiembre de 2012, emanada de la extinta CAJANAL, en virtud de la cual se dio cumplimiento al fallo antes aludido, aunque de manera parcial en consideración de la parte ejecutante (fls. 111-114).

Conforme a lo anterior, el Despacho considera que la sentencia proferida, conjuntamente con los actos de ejecución y la liquidación que efectuó CAJANAL hoy UGPP para el cumplimiento de la sentencia, configuran un título ejecutivo, por darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso, en razón a que la decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y del contenido de la misma se desprende la obligación hoy reclamada por la ejecutante, que corresponde el pago de las diferencias dejadas de cancelar desde el 18 de agosto de 2009, siendo una de las órdenes impartidas por este estrado judicial y que no fue cumplida de manera parcial por el ente administrativo ejecutado.

Así las cosas, es procedente el mandamiento de pago sujeto a las prescripciones contenidas en los artículos 424 y 430 del Código General del Proceso, respecto de la **diferencia en el monto** de los emolumentos que no fueron incluidos al momento de efectuar la liquidación, y ordenados en la sentencia aportada como título ejecutivo, con su correspondiente indexación e intereses moratorios que devengaron.

Ahora bien, se tiene que el monto solicitado por el ejecutante asciende a la suma de **\$54.698.925⁴**, conforme la liquidación expuesta por el ejecutante, **sin que necesariamente esta suma sea el valor a cancelar**, toda vez que ello está sujeto a la determinación precisa de la solicitud de cumplimiento a la sentencia, las excepciones propuestas por la demandada y a la liquidación del crédito.

A su vez, se precisa que los valores ordenados se encuentran comprendidos desde el 18 de agosto de 2009, en virtud de lo dispuesto en la sentencia proferida por este Despacho Judicial el 5 de agosto de 2011, en un monto del 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, con la inclusión de la **totalidad** de los factores que en dicha providencia se indicaron y bajo los parámetros que en la misma se establecieron.

⁴ Folios 122-123

En mérito de lo expuesto, en los términos del artículo 430 del Código General del Proceso, el Despacho dispondrá librar mandamiento ejecutivo a favor de la señora **ANA DELIA SALAMANCA BUITRAGO** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP** por la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$54.698.925) m/cte.**

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva, a favor la señora **ANA DELIA SALAMANCA BUITRAGO** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP** por la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$54.698.925) m/cte.**, por concepto de las diferencias de las mesadas dejadas de cancelar desde el 18 de agosto de 2009.

SEGUNDO: Para los efectos del numeral 4° del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2° del decreto 2867 de 1989, se fija la suma de **SESENTA MIL PESOS (\$60.000,00.) m/cte**, que deberá consignar la parte demandante en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, **en la CUENTA CORRIENTE ÚNICA NACIONAL No. 3-082-00-00636-6 del Banco Agrario “CSJ-DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS -CUN”.**

TERCERO: Notifíquese esta providencia personalmente a la entidad demandada, **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP**, en los términos del artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

CUARTO: Fijese a la entidad demandada, el término de cinco (5) días para que cumpla con la obligación de efectuar el pago de los intereses moratorios, reconocidos en la sentencia que constituyen título ejecutivo en el presente proceso (Artículo 431 C.G.P.).

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la demandada podrá proponer excepciones de mérito, siguiendo las reglas contenidas en el artículo 442 del C.G.P.

SEXTO: Notifíquese personalmente al señor representante del Ministerio Público, en los términos del artículo 199 del Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los términos del artículo 199 del Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.



En el evento en que la agencia decida intervenir en el proceso, el mismo se suspenderá en los términos del artículo 611 del Código General del Proceso.

OCTAVO: Se reconoce personería jurídica al abogado **CLIMACO ACHURY MURCIA**, identificado con cédula de ciudadanía número 4.948.432 de Timana/Huila y portador de la tarjeta profesional 159.602 del C. S. de la J., como apoderado principal de la demandante, en los términos y para los fines del poder visible a folio 4 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 23 DE JULIO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
--

